



Fernando y Macarena en la terraza de la vivienda que ocupan en la corrala La Ilusión conversan con su vecina Rocío García, a la izquierda. / JULIÁN ROJAS

La corrala antes que la calle

Cinco edificios vacíos de Sevilla han sido ocupados por 70 familias que carecían de vivienda. Los nuevos vecinos, que cuentan con el asesoramiento de profesionales del 15-M, se organizan de forma asamblearia

ÁNGELES LUCAS
Sevilla

"Siéntate, como si estuvieras en tu casa". Toñi invita a tomar asiento en uno de los sofás de mimbre que ha puesto en el salón del piso que comparte con su hijo. Ella pone nombre y sonrisa a una de las 70 familias que desde el pasado mayo ocupan cinco bloques vacíos en Sevilla. Es una

de las pioneras de una nueva forma de ocupación en la ciudad, caracterizada por el perfil de los alojados —familias trabajadoras— y por la respuesta social, más comprensiva ante el drama de los desahucios. Son dos las palabras clave de este fenómeno en Sevilla: corrala, en femenino; y la utopía, como algo que se acerca a lo posible.

El origen lo abanderó un gru-

po de vecinas del barrio de la Macarena que en tertulias vespertinas quedaban para charlar de sus dificultades económicas. De esa convivencia, y pensando que unidas serían más fuertes contra los desahucios, forjaron la Corrala de Vecinas La Utopía. Luego, un documentalista las grabó en vídeo contando sus vidas y lo difundió por Internet. Posteriormente, con el asesora-

miento de profesionales del 15-M de Sevilla y otras asociaciones, ocuparon un bloque el pasado mayo con 36 pisos deshabitados. Marcaron el paso.

"Es incomprensible. Miles de viviendas vacías, cada vez más gente en la calle, y el Gobierno dando dinero a los bancos corruptos. No faltan viviendas, falta justicia", resume Irma Blanco, trabajadora social en paro y una

de las primeras inquilinas. A lo largo de estos 10 meses, otras 70 familias han ocupado cinco casas más en la ciudad. Son las corralas: Conde Quintana, La Alegría (desalojada), La Ilusión, La Esperanza y Libertad. Nombres inspiradores.

Ninguna de ellas tiene luz ni agua, aunque no faltan macetas que adornen las ventanas y den vida a los edificios. En La Utopía

málaga

Ante la policía por piratear el agua

Medio centenar de vecinos de la barriada malagueña de La Palmilla están pleiteando con la empresa municipal de aguas (Emasa), a la que acusan de coaccionarles para que reconozcan deudas de hasta 70.000 euros. En este barrio humilde, castigado por el menudeo de drogas, muchas viviendas se venden de palabra. Con cada operación se traspasan deudas acumuladas, como agua, Impuesto de Bienes Inmuebles... El Ayuntamiento, gobernado por el PP, ha contratado a un equipo de abogados, entre los que está la exedil popular Rosa Agüera, que se

encarga de que los vecinos firmen estos reconocimientos de deuda. Los usuarios de La Palmilla aseguran que les amenazan con cortarles el agua, y si optan por engancharse de forma ilegal les avanzan que recibirán una demanda. Algunos dicen haber firmado sin ser conscientes de que estaban asumiendo deudas que oscilan entre los 70.000 y 80.000 euros. El Consistorio les demanda por defraudación del fluido hídrico y ha llegado a reclamar penas de prisión, según uno de los abogados de la plataforma 15-M. "Hay bloques que están enganchedos de forma ilegal al completo. Hasta las monjas del barrio se abastecen de esta forma", señalan. "Las querellas se plantean en los casos de fraude (...) para evitar que una situación injusta y poco

ejemplificadora sea consentida", contempla la dirección de Emasa en una respuesta a una pregunta plenaria de Izquierda Unida. La Palmilla concentra el 31% de los pagos por abastecimiento de agua de la capital, 3,6 de los 11,3 millones pendientes de cobro. La edil de Medio Ambiente, Ana Navarro, asegura que en este distrito se han interpuesto 287 demandas contra usuarios por una deuda total de 490.000 euros. Con otros 991 clientes han acordado el abono de 1,7 millones "en plazos ajustados a su situación económica". Miembros del colectivo Er Banco Güeno —integrado por la Plataforma de afectados por la hipoteca, el 15-M, y la Asociación de la integración de la comunidad gitana de

Palma-Palmilla— alertan de que varios vecinos ya han sido detenidos y trasladados a dependencias policiales por realizar estos enganchedos ilegales. "En algunos casos les reclaman deudas engordadas desde 1976 (...) No pueden pagar esas cantidades", asegura el abogado. En el Ayuntamiento insisten en que no se exige a ningún ciudadano que asuma deudas anteriores a la fecha en que haya comenzado a usar la vivienda, siempre y cuando lo pueda acreditar. El cambio de mano frecuente de las viviendas y la ausencia de escrituras dificulta notablemente que se pueda cumplir ese requisito. Los afectados reclaman que se vea caso a caso, y no se les termine atribuyendo una deuda que no es suya. / JUANA VIÚDEZ



hay incluso un huerto de pimientos en un balcón. "Están riquísimos, mejor que los del supermercado!", exclama Inmaculada Díaz después de arreglar el piso para el noveno cumpleaños de su hija Elisa, que lo celebró junto a sus dos hermanos y sus primos. "Mi marido es el que los cultiva, él no trabaja y yo limpio casas", detalla Díaz.

Como su historia, hay centenares en las corralas: Vanesa, con tres hijos menores de siete años, uno de ellos con síndrome de Down, ha perdido la ayuda a la dependencia; Juan Gómez, de 60 años con dos hijas, tiene 40 años cotizados y está vendiendo mostachones en la calle huyendo de la policía; Rocío García trabajaba en un catering hasta que la despidieron y se fue a vivir a un garaje con sus dos hijos. O Toñi, que limpiaba casas y atendía en una residencia de ancianos, y ahora busca hierros en la basura. Ella tiene un generador compartido con su vecina, pero no usa la electricidad para ver la tele. "No quiero, la vida real está aquí", dice señalando el suelo.

A las corralas de la capital se le suman otras dos en la provincia; una en Alcalá de Guadaíra y otra en Villanueva del Río y Minas. Todas han desarrollado un peculiar patrón de acceso a las viviendas: los ocupas entran en los pisos y lo hacen público; las familias se distribuyen según sus necesidades estudiadas con anterioridad; los alojados hacen convivencias antes de entrar en las casas para funcionar mejor en comunidad; y siempre se ofrecen a pagar rentas y facturas. "Tenemos derecho a vivienda, pero también tenemos obligación de pagar", coinciden todos.

De momento, los inquilinos de la Corrala Libertad, conformados en cooperativa, han sido los primeros en acordar con la inmobiliaria propietaria del edificio el pago de un alquiler social. "El acuerdo es único en Andalucía y va a servir de modelo a otros dueños de inmuebles", asegura Luis De los Santos, abogado del grupo de juristas 17 de marzo. "Con respecto a los demás, pedimos que se pare el procedimiento legal por delitos de usurpación y que puedan acceder a un alquiler social", dice el abogado entre otros requerimientos. Una cuestión jurídica paralela fue la detención el pasado noviembre de cinco personas ajenas a la ocupación, entre ellas la periodista Ana García, durante una manifestación por el derecho a la vivienda en la puerta de la corrala La Ilusión.

La repercusión mediática

"La agencia de noticias Reuters cubrió el tema de la corrala La Utopía desde la primera semana, cuando hicimos pública la acción. Después de ellos han pasado por aquí *The New York Times*, la BBC, medios chinos, japoneses, alemanes... la

repercusión mediática ha sido espectacular, desbordante", cuenta Juan José García, un periodista que de forma voluntaria gestiona las relaciones con los medios de La Utopía. "He llegado incluso a ponerme de acuerdo con mi otra compañera de comunicación para cogernos las vacaciones de forma que el monstruo [en referencia a la corrala] disponga siempre

de un responsable que atienda a los medios de comunicación. No paramos de traducir del español, de explicarles, de convocar entrevistas, de buscar incluso los hoteles en los que se puedan quedar los periodistas", dice. García resalta además la atención que le han prestado los medios internacionales. "The Guardian publicará un extenso reportaje", asegura.

Tal es el tránsito de periodistas, curiosos, gente que lleva muebles, ropa o comida, que las inquilinas se pasan el día abriendo puertas para enseñar su modo de vida. "Habíamos pensado hacer una ruta turística que se llamara *Vacaciones Reivindicativas* y cobrar entrada por ello. Sería un éxito", dice una de las residentes de broma.



La familia de Inmaculada Díaz posa en su vivienda de La Utopía junto a familiares en el cumpleaños de Elisa, con sudadera rosa claro. JULIÁN ROJAS

La delegada territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio en Sevilla, Granada Santos (IU), cree que las corralas son algo más que ocupación. "También son un proyecto social, de creación de una conciencia de cooperación y de solidaridad", declara. Ella forma parte de una mesa de negociación para resolver la cuestión de la corrala La Utopía. Aunque está pa-

ralizada. Ibercaja —entidad propietaria del bloque— espera informes de los servicios sociales para ofrecer a los alojados ayudas de alquileres en otro lugar, según informan fuentes de Ibercaja. Por otro lado, la instalación de electricidad en las viviendas depende de la autorización municipal, declaran desde Endesa. El Ayuntamiento, que no ha atendido la consulta de este pe-

riódico, opta por no resolver acuerdos de las negociaciones.

Y el defensor del Pueblo, José Chamizo, principal intermediador entre las corralas, las entidades financieras, las inmobiliarias y las Administraciones, urge a la resolución del problema del acceso a la vivienda en Andalucía. "Hay que desarrollar más acciones contra los desahucios y que se respete tanto el derecho a

la vivienda como el de los propietarios", declara Chamizo.

La Junta ha evitado un millar de desahucios, según sus cálculos, con un plan para combatir los desalojos. "Hay que cumplir con el Estatuto de Autonomía, con la Constitución y con la Declaración de Derechos Humanos", alega Granada. Puede sonar a utopía, sí. Y de eso ya saben los vecinos de las corralas.

perfil de los nuevos ocupas

Parejas de 30 a 40 años con hijos

La mayoría de las personas que están residiendo en las corralas de Sevilla son parejas de 30 a 40 años con hijos. Gran parte de ellos ha sufrido desahucios o ha vivido con familiares, otros son jóvenes con problemas de acceso a empleo, y en menor medida, personas mayores. Antes de instalarse en las corralas, muchos se acercaron a algunos de los 13 Puntos de Información de Vivienda y Encuentro (PIVE) de Sevilla, que la Intercomisión de Vivienda del 15-M, junto a otras asociaciones, tiene distribuidos por barrios.

"En cada uno de estos puntos, organizados en comisiones, atienden un abogado y varios activistas. Asesoramos sobre las opciones de la dación en pago, la posibilidad de parar un desahucio, de cómo conseguir un alquiler social o cuestiones de ocupación", explica Ibán Díaz, voluntario en el PIVE de San Pablo. Díaz cuenta que atiende a una media de seis personas por semana y que algunas de ellas vienen derivadas de la Unidad de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Sevilla, o de Cáritas. "Nosotros trabajamos con cuestiones que están fuera de la legalidad. Pero es lo que está dentro no es suficiente. Por eso, los servicios sociales no alcanzan a dar respuesta a las demandas", declara.

Posteriormente, las comisiones de barrios organizan a los afectados por grupos, según el carácter de urgencia o las necesidades que presenten. "Así van juntos a parar desahucios o a protestar", añade Díaz. Y por otro lado, un grupo de profesionales anónimos organiza encuentros, convivencias y talleres en los que se enseña cómo funciona una asamblea a los grupos de personas que pueden llegar a convivir juntas si deciden ocupar alguna vivienda. Estos profesionales también estudian la situación de los bloques vacíos en la ciudad, para que, si llega el momento de la ocupación, puedan organizar la distribución de las familias. Los que tienen hijos se instalan en los pisos con más habitaciones, los jóvenes en pisos

altos, y los enfermos o mayores en plantas bajas. Fernando, de 23 años, se hizo con uno de los pisos altos de la Corrala La Ilusión después de asistir a talleres durante cuatro meses. Ahora pertenece a la comisión técnica y de mantenimiento del edificio. "Antes de llegar aquí vivía en el Cerro del Águila con nueve miembros de mi familia en 50 metros cuadrados", cuenta. "Ahora estoy mejor, aunque pase mucho frío, y cada noche, en vez de ver la tele, lo único que vea es como se mueve la llama de una vela", dice con ánimo. Asiste a un curso trimestral de fontanería organizado por un profesor de la Universidad de Sevilla para los residentes en las corralas. "Espero encontrar trabajo pronto", afirma.